



NUE 29-ID-2018 (OC)

contra Barrera Solórzano

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con quince minutos del nueve de enero de dos mil veinte.

1. Descripción del caso:

1. El 15 de agosto de 2018, [REDACTED] interpuso denuncia en contra de **Ciro Antonio Barrera Solórzano**, Oficial de Información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, por el supuesto cometimiento de las siguientes infracciones: 1) Infracción muy grave establecida en el Art. 76 letra c) de la LAIP consistente en: *"No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto"*; 2) Infracción muy grave establecida en el Art. 76 letra e) de la LAIP consistente en: *"negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación"*; y, 3) Infracción grave establecida en el Art. 76 letra b) de la LAIP consistente en: *"denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial"*.

Por otra parte, el denunciante manifestó que mediante resolución emitida en fecha 11 de julio y notificada el 31 de julio de 2018, en el proceso de apelación bajo referencia NUE 32-A-2018 (CO), este Instituto resolvió ordenar a la **PNC**, que a través de su oficial de información entregue la versión pública de: *"Copia del video de la cámara instalada sobre el Boulevard de los Héroes y 21 calle Poniente y des mismo Boulevard y 25 calle Poniente, correspondientes al día 29 de septiembre de 2017 entre las 18:55 y 20:00 horas"*. En ese sentido, el plazo para que la **PNC** entregara la información venció el 15 de agosto de 2018, sin haber recibido respuesta alguna; sin embargo, posteriormente la Unidad de Acceso a la Información de la **PNC** le indicaron que la información solicitada es inexistente; respuesta que para el ciudadano es incongruente, ya que en el trámite de apelación el oficial de información, no alegó que la misma fuera inexistente, sino que arguyó la seguridad de los transeúntes.



El Instituto admitió la denuncia y se designó a la entonces comisionada **María Herminia Funes de Segovia** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución, sin embargo, renunció al ejercicio de su cargo y se reasignó el caso en fecha veintitrés de abril del presente año a la comisionada **Silvia Cristina Pérez Sánchez**, quien fungía hasta esa fecha como Comisionada Suplente en Funciones por el Sector de Universidades. No obstante, el día veintidós de mayo de este año, se reasignó nuevamente el caso a la Comisionada **Daniella Huevo Santos**, quien fue nombrada como Comisionada Suplente por el Sector de Sindicatos; sin embargo, su periodo fungiendo en función interina finalizó. Por lo tanto, el caso fue reasignado a la Comisionada **Olga Noemy Chacón de Hernández**

En este orden de ideas, este Instituto requirió el informe de defensa al denunciado, en un primer momento se tuvo por no rendido; no obstante, **Barrera Solórzano** manifestó enviar en tiempo y forma su escrito de defensa. Al constatar lo argumentado, se advirtió que el referido informe fue remitido, pero se anexó en el expediente bajo referencia NUE 32-A-2018, —en fecha 1 de octubre del 2018—; sin embargo, no había sido incorporado en el presente procedimiento. Por lo que, se agregó al expediente bajo referencia NUE 29-D-2018, y en consecuencia se tiene por rendido el informe de defensa por ser enviado dentro de los siete hábiles luego de ser requerido, e incorporado al presente procedimiento.

Recibido el informe de defensa, **Barrera Solórzano** en lo medular, justificó su actuar argumentado que al recibir la resolución emitida por este Instituto a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del once de julio de dos mil dieciocho, en la que se ordena la entrega de información, inició las diligencias para la búsqueda de lo requerido ante la División de Emergencias 911, recibiendo respuesta en fecha 09 de agosto de 2018, a través de memorándum N°B00179/JEF-DE911/2018 en el cual el jefe de la unidad antes mencionada le comunicó que la información es inexistente porque no cuentan con el video requerido, ya que en la dirección indicada la Policía Nacional Civil, no posee cámaras instaladas, en consecuencia no existe grabación de videos en la fecha y hora que se solicitan.

II. Durante la audiencia oral, el denunciante no compareció pese haber sido notificado en legal forma de su realización, el denunciado **Barrera Solórzano** ratificó su postura, explicando que su actuar durante el trámite de la solicitud de información, brindó una respuesta

al ciudadano [REDACTED] tal como le informó el jefe de la División de Emergencias del 911, de la Policía Nacional Civil. Además, hizo referencia al procedimiento que se tramitó bajo referencia NUE 32-A-2018 mediante el cual se argumentó que la información no podía ser entregada por clasificarse como confidencial; sin embargo, al realizar las búsquedas la División anteriormente descrita determinó que no existen cámaras de la PNC colocadas en la dirección descrita por [REDACTED]

2. Análisis del caso:

El análisis jurídico del presente caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) análisis de la potestad sancionatoria del Estado y del principio de legalidad, como principios que rigen el ejercicio de dicha facultad por parte del este Instituto; (II) consideraciones sobre las infracciones a la LAIP, presuntamente cometidas por **Ciro Antonio Barrera Solórzano**; y, (III) determinación de la cuantía de la multa a imponer, en el caso que sea procedente.

I. Los procedimientos administrativos sancionadores pueden iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, por petición razonada de otros órganos o denuncia ciudadana; es decir, según como lo disponga el ordenamiento jurídico aplicable.

Asimismo, la potestad administrativa sancionadora se encuentra sujeta a principios y garantías, sustantivos y procesales, que han de informar su ejercicio; entre ellos el establecimiento de un procedimiento sancionador que garantice el respeto de los derechos constitucionales de los posibles sancionados.

La sanción administrativa constituye un acto de gravamen que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, mediante la privación de un derecho -como prohibición de una determinada actividad, denominada sanción interdictiva, o por medio de la imposición de un deber económico antes inexistente -sanción pecuniaria-.

El procedimiento sancionatorio que este Instituto conoce y que se encuentra regulado a partir del art. 76 de la LAIP, tiene el propósito de identificar y definir la responsabilidad en la que puedan recaer los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la LAIP, para lo cual, en el título VIII de la misma, se encuentran las infracciones a la ley y sus sanciones. Esas



infracciones se dividen en tres apartados, los cuales son: (i) Infracciones muy graves; (ii) Infracciones graves; e (iii) Infracciones leves.

Es necesario recordar que la imposición de sanciones es una de las manifestaciones de la facultad de castigar la administración pública, lo que obliga –ineludiblemente-, a la protección de garantías como la presunción de inocencia que presupone que los servidores públicos, a quienes se les atribuye la comisión de una infracción, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario; el derecho de defensa que le brinda la posibilidad al supuesto responsable de hacer uso de todas las herramientas que la ley le facilite, para defenderse de los argumentos que hace el denunciante; y el derecho al debido proceso, entre otros.

De tal forma que, es indispensable tomar en cuenta el principio de congruencia de la acción, en virtud del cual la sentencia que se emita sobre un caso debe versar sobre los argumentos que conformaron la acusación con el fin de respetar el derecho de defensa del imputado. En tal sentido, es relevante también en el procedimiento administrativo sancionador, mantener en la medida de lo posible, el título de la imputación realizada al indiciado, sin que esto implique su inamovilidad, pues también bajo ciertos matices puede modificarse.

II. A continuación se expondrá en qué consisten cada una de las posibles infracciones cometidas en el Art. 76 de la LAIP en contra de **Ciro Antonio Barrera Solórzano**: a) letra “c” de la infracción muy grave “*No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto*”; b) letra “e” de la infracción muy grave “*Negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación*”; y, c) letra “b” de la infracción grave “*Denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial*”.

a) El cometimiento de la infracción muy grave a la LAIP, consistente en “No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto”, implica la omisión del oficial de información para entregar la información al solicitante, sin emitir ningún razonamiento jurídico o un pronunciamiento que motive la razón de la denegatoria.

Asimismo, esta infracción puede referirse al momento, que un ciudadano está respaldado por una orden de entrega de información emitida por el IAIP y el oficial de información se niega a recibirla y por consiguiente a entregarla; obteniendo con esto una posible

negativa a proporcionar lo solicitado y ordenado, teniendo como consecuencia que la persona solicitante pueda acudir al Instituto para iniciar el procedimiento sancionatorio respectivo.

Para el caso en comento, se evidencia la diligencia del oficial de información para entregar una respuesta a la solicitud de información realizada por el ciudadano, requiriendo a la División de Emergencias 911 dicha información el día 06 de febrero de 2018, a través de memorándum PNC/UAIP/255/2018, y en la misma fecha por medio de memorándum No.00055/JEF-DE911/2018, el jefe de la unidad antes mencionada le informó que por ser una información de carácter confidencial, y debido a que esa división es la responsable del resguardo y divulgación, no se puede brindar la información solicitada. Sin embargo, el denunciado mediante su informe de defensa expresó que el 09 de agosto de 2018 recibió un memorándum bajo referencia N°B00179/JEF-DE911/2018 en el cual el jefe de la División de Emergencias 911 le informó que no cuentan con el video requerido, porque en la dirección indicada la Policía Nacional Civil, no tiene cámaras instaladas, por ello no existe grabación de videos en la fecha y hora que se solicitan; comprobándolo por medio de copia de un acta emitida por el jefe de Centro de Control de Video Vigilancia de 911 y analista de videos CCVV de 911 en el que se evidencia lo descrito.

En consecuencia de lo anteriormente descrito, este Instituto advierte que el denunciado Barrera Solórzano si realizó una búsqueda de la información ante la presunta unidad generadora de la información; sin embargo, existió una incongruencia debido a que el jefe de la División de Emergencia 911 se anticipó sin realizar las debidas diligencias a emitir en primer lugar que la información requerida por el ciudadano [REDACTED], se encontraba clasificada como confidencial según lo establecido en el Art. 24 literal "a" de la LAIP, por establecer un peligro para los ciudadanos que transitaban en dicha dirección.

Posteriormente, cuando el oficial de información para acatar la resolución emitida por este Instituto, solicitó nuevamente lo requerido en versión pública el jefe de la División en comento expresó que no existía dicha información por no contar con cámaras instaladas en dicha ubicación; generando, con esto incongruencia porque se debe aclarar que al realizar una inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha información. En este sentido, la inexistencia es una calidad que se atribuye a la información



solicitada. Por lo anterior, la clasificación y la inexistencia no coexisten entre sí, en virtud de que la clasificación de información implica invariablemente la existencia de un documento o documentos determinados, mientras que la inexistencia conlleva la ausencia de los mismos en los archivos de la dependencia o entidad de que se trate.

En vista de lo anterior, se observa que la argumentación y análisis de la información fue presentada de manera oportuna, no obstante en su respuesta no agregó el memorándum N°B00179/JEF-DE911/2018 que emitió el jefe de la División de Emergencias 911; en consecuencia, podría afirmarse que la sola denegatoria no constituye una infracción a la ley, pues existen ocasiones en donde el ordenamiento jurídico habilita realizar esta acción, tal es el caso de la información confidencial y reservada.

Para el caso en comento, no existió una denegatoria sin la debida justificación, pues se proporcionó un acta de inexistencia de la información. No obstante lo anterior, resulta oportuno realizar un análisis a efecto de establecer si la declaratoria de inexistencia fue hecha con base a derecho o no.

b) El cometimiento de la infracción muy grave a la LAIP, consistente en “negarse a entregar la información solicitada sin la debida justificación”, puede implicar la existencia previa de una solicitud de información y al momento de resolver sobre ésta, el oficial de información o el servidor público encargado de la unidad que posee la información puede negarse a entregarla al solicitante, sin emitir ningún razonamiento jurídico o un pronunciamiento que motive la razón de la denegatoria.

Por otro lado, esta infracción también puede referirse al momento, que algún ciudadano presenta su solicitud de información y el oficial de información se niega a recibirla y por consiguiente a tramitarla; lo cual podría entenderse como una negativa a pronunciarse sobre el fondo de lo solicitado, obteniendo como consecuencia que la persona solicitante pueda acudir al Instituto para iniciar el procedimiento sancionatorio respectivo.

Para este caso, se ha verificado que el oficial de información en ningún momento dilató la búsqueda de información en el trámite de la solicitud de información, así como en el procedimiento de apelación, donde el ahora denunciado emitió una respuesta al ciudadano en relación a la información requerida, la cual consta el acta de inexistencia de información emitida

por la División de Emergencias 911 con su respectiva resolución de inexistencia emitida por el oficial de información de la Policía Nacional Civil.

e) El cometimiento de la infracción grave a la LAIP, consistente en “denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial”, refiere que **la negativa del funcionario obligado a brindar información solo puede justificarse a partir de que exista una clasificación previa de la información**, que la defina como reservada o confidencial. Esta infracción es similar a la estipulada como muy grave de la letra “e”, que se refiere a la negativa de entregar información sin justificación, la diferencia es que mientras en el caso de la letra “e” la infracción es por la arbitrariedad del funcionario que se opone a entregar la información sin dar ninguna razón o justificación; en este literal, la infracción no es por no haber dado una explicación, sino por que denegó una información que no estaba clasificada previamente como reservada o se tratara de una información confidencial.

El denunciado argumentó en la audiencia oral, que en ningún momento denegó la información, en un primer momento se limitó a informar al solicitante [REDACTED] sobre la confidencialidad de lo requerido con base a la respuesta del jefe de la División de Emergencias 911. Posteriormente, en la emisión de la resolución definitiva del caso NUE 32-A-2018, requirió una vez más la información, ante lo cual se le hizo saber de la inexistencia de la información requerida porque la Policía Nacional Civil no tiene cámaras de video vigilancia en esa zona específica.

Por lo tanto este Instituto al verificar los argumentos expuestos por el denunciado en su informe de defensa y en sus alegatos durante la realización de la audiencia oral, determina que no existen elementos contundentes sobre el actuar de Barrera Solórzano que ameriten la imposición de una sanción. No obstante, se advierte a la Policía Nacional Civil que tiene que existir un control por parte de la institución al sustanciar cada solicitud de información y no emitir respuestas sin tener claro cómo está clasificada la información o si esta existe, ya que de reiterarse en futuros procedimientos esta actuación este Instituto puede analizar la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionatorio



III. Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones anteriormente expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 94, 96 y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

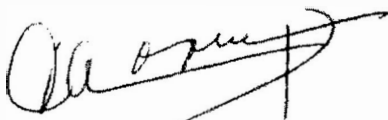
a) **Absolver** a **Ciro Antonio Barrera Solórzano** Oficial de Información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, por el supuesto cometimiento de las siguientes infracciones: **1)** Infracción muy grave establecida en el Art. 76 letra c) de la LAIP consistente en: *“No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto”*; **2)** Infracción muy grave establecida en el Art. 76 letra e) de la LAIP consistente en: *“negarse a entregar la información solicitada, sin la debida justificación”*; y, **3)** Infracción grave establecida en el Art. 76 letra b) de la LAIP consistente en: *“denegar información no clasificada como reservada o que no sea confidencial”*.

b) **Incorpórese certificación** del informe de defensa remitido por el denunciado en el procedimiento de referencia 32-D-2018.

c) **Transferir** al archivo el presente expediente una vez esta resolución adquiera el estado de firmeza.

d) **Publíquese** esta resolución, oportunamente

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN
MC/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de enero de dos mil veinte.



NOTIFICADOR
IAIP



